

Agustín Cueva
Ecuador
en su nueva encrucijada
histórica

En un hermoso poema intitulado *Yo me fui con tu nombre por la tierra*, Jorge Enrique Adoum evoca al Ecuador en los términos siguientes:

Nadie sabe en dónde queda mi país, lo buscan entristeciéndose de miopía: no puede ser, tan pequeño ¿y es tanta su desgarradura, tanto su terremoto, tanta tortura militar, más trópico que el trópico?

Y es verdad que poco se conoce sobre este pequeño país sudamericano más allá de sus disputadas fronteras. El poema citado data de 1964, o sea del momento en que el Ecuador estaba sojuzgado por la dictadura militar establecida un año antes y que se mantendría en el poder hasta 1966. Los entretelones políticos que llevaron a la instauración de aquel régimen, a través de una intensa campaña de desestabilización del gobierno precedente, han sido minuciosamente descritos por el ex-agente de la CIA, Phillip Agee, en su conocido libro *Inside the Company. CIA Diary*. No hace falta entrar a reconstituir los pormenores de un periodo en cierto sentido ya remoto, como el que antecedió al golpe de Estado de 1963, aunque sí conviene recordar dos datos claves. El primero, que la crisis política que se hizo patente desde 1959, con la masacre de varios cientos de manifestantes subproletarios en el centro de Guayaquil, y que se expresó de manera inequívoca con el derrocamiento de Velasco Ibarra en 1961, tuvo sus raíces más profundas en el declive de la economía "bananera" que había servido de base para la etapa de desarrollo capita-lista que se inició en Ecuador desde mediados de la década de los cuarenta. Desarrollo desde luego limitado, que ni si-quiera impulsó un proceso sostenido de industrialización, sino que se mantuvo en el marco de una extensión del capitalismo primario exportador, el cual cuando más fue capaz de pro-mover, colateralmente, cierta modernización de algunas urbes y de determinadas unidades agropecuarias dedicadas a abastecer este nuevo mercado interno.

El segundo dato que conviene recordar es que la mencionada campaña de desestabilización se produjo en circunstancias en que el gobierno de Carlos Julio Arosemena Monroy (1961-1963) intentaba articular, aunque con muchas vacilaciones, una política progresista y nacionalista que en ese momento chocó con los designios estadounidenses de bloquear y hostigar a Cuba, así como de reprimir a todos los movimientos populares que apareciesen como "castristas" a ojos del Departamento de Estado. Hecho que no está por demás rememorar en un momento como el actual en que dos incidentes, que en realidad constituyen algo más que esto y que no creemos estén desvinculados el uno del otro, vuelven a traer el nombre del Ecuador a las primeras páginas de la prensa internacional: nos referimos a la reciente guerra limitada con el Perú y a la ocupación de la embajada del Ecuador en La Habana por parte de un grupo de contrarrevolucionarios cubanos, asuntos de los que nos ocuparemos más adelante.

Entre marzo de 1966, fecha en que fue derrocada la dictadura en cuestión, y 1972, año en que los militares asumieron de nuevo directamente el poder, el Ecuador vivió un momento de prolongación de la crisis económica (incapacidad de establecer una nueva modalidad de acumulación de capital) y de consiguiente crisis política: gobierno interino de Clemente Yerovi (1966), gobierno provisional de Otto Arosemena (1966-1968), gobierno constitucional de Velasco Ibarra (1968-70), dictadura del mismo Velasco (1970-72). Pero, por debajo de estos avatares políticos y en cierto sentido a través de ellos, el país fue entrando en una nueva fase de desarrollo capitalista que tendría como eje la extracción y exportación del petróleo. El golpe de Estado de 1972, con sus peculiares características, se explica precisamente dentro de este contexto.

Se trató, en primer lugar, de un golpe militar institucional (o sea, no caudillista), de corte nacionalista, que por un lado buscaba redefinir los nexos de dependencia con los Estados Unidos y, por otro, modificar la contextura del bloque en el poder hasta entonces vigente en el país. Y es que, a partir del gobierno de Otto Arosemena, el pacto entre la oligarquía criolla y el capital imperialista en torno al petróleo recién descubierto se había venido realizando de la manera más típicamente colonial que se puede concebir: enajenación de esa riqueza natural no siquiera al mejor postor, sino a quien mejores "comisiones" ofreciese a la camarilla oligárquica que en el momento detentaba las riendas del poder; consiguientemente, y como compensación del vil precio obtenido por cada hectárea enajenada, entrega

al capital foráneo de una superficie que, para 1972, equivalía a casi un tercio del territorio nacional; en fin, carencia de todo proyecto burgués más o menos coherente de desarrollo del país.

En esas condiciones, el gobierno militar encabezado por Rodríguez Lara no tuvo mayor dificultad en dar un contenido concreto a sus postulados nacionalistas, que básicamente se tradujeron en las siguientes medidas: reversión al Estado ecuatoriano de más de cuatro millones de hectáreas en la región oriental; reversión de los campos hidrocarburíferos de la Anglo Ecuatorian Oil en la costa; reducción de las concesiones, de cuarenta a veinte años; adquisición por parte del Estado del 25% de los derechos y acciones de la Texaco Gulf; rescate, también en favor del Estado, de todas las explotaciones de gas; creación de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE); construcción de una refinería estatal en la provincia de Esmeraldas; impulso a la creación de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE); ingreso a la OPEP, en junio de 1973.

Así, el Estado ecuatoriano no sólo redefinía sus nexos de dependencia en términos burgueses ya modernos, sino que además daba un paso firme hacia su robustecimiento económico. Por primera vez en su historia ese Estado iba a dejar de ser una especie de raquíta prolongación de una economía oligárquica que lo nutría a cuentagotas a la vez que lo cercenaba (desmembrándole una serie de entidades "autónomas" y "semiautónomas" que constituían otros tantos bastiones de cada fracción oligárquica), para convertirse en un verdadero centro de dirección y regulación de la acumulación de capital. Al acentuar su autonomía relativa con respecto a cada una de las fracciones de la clase dominante, el Estado trataba pues de construir, desde la esfera política, esa coherencia de la que secularmente ha carecido aquella clase. En esta perspectiva se creó y desarrolló, con los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo, un sector capitalista de Estado, con un área estatal propiamente dicha que comprendía: refinamiento de petróleo, pesca, acería integrada, elaboración de amoníaco; y un área mixta que incluía: petroquímica, cemento, astilleros, complejos de madera-papel, frigoríficos, plantas pasteurizadoras, nitrocelulosa, sosa cáustica, tractores de rueda, etcétera.

Todo lo cual significaba un paso adelante en el proceso de industrialización del país, aunque no precisamente impulsado por la burguesía industrial privada. En cierto sentido, tanto la política nacionalista como la tendencia a la conformación de un capitalismo de Estado eran más bien la expresión, tecnocráticamente redefinida, de viejas aspiraciones y luchas de los sectores populares

políticamente más avanzados del país. Haciéndose eco de las reivindicaciones de estos sectores, el documento-proclama que exhibió Rodríguez Lara con el nombre de *Filosofía y plan de acción del gobierno revolucionario y nacionalista del Ecuador*, incluso llegó a afirmar que el nuevo gobierno "realizará una reforma agraria real y efectiva", distribuyendo la tierra "a las personas naturales que genuina y directamente la trabajan", y que "hará todos los esfuerzos que sean necesarios para eliminar la dependencia del país en los aspectos económico, político, social, cultural, militar e ideológico".

La dependencia por supuesto no fue eliminada, sino única-mente redefinida en los términos que ya vimos. En cuanto' a la reforma agraria, quedó aplazada para las calendas griegas.

El gobierno de Rodríguez Lara fue objeto de un triple acoso desde la derecha, que se manifestó de manera ya articulada e inequívoca en los años 1974 y 1975. Como era de esperarse la reacción provino, en primer lugar, de parte del imperialismo: la Texaco Gulf realizó un boicot de la producción y exportación de petróleo que durante el último semestre de 1974 causó al Estado ecuatoriano una pérdida de más de cien millones de dólares, y de una magnitud similar en el primer trimestre de 1975. Sólo en abril de ese año el gobierno intentó restablecer su autoridad fijando una cuota mínima de exportación, a lo que la Texaco respondió con una suspensión casi completa de la extracción de petróleo por cerca de dos meses, hasta que el gobierno cedió reduciendo en 43 centavos de dólar el precio del barril de crudo. Este hecho sin duda marcaba un punto de inflexión en la política nacionalista y de la curva, ya declinante, en que entraba el régimen de Rodríguez Lara.

En segundo lugar, y aquí se ven con claridad los efectos del mantenimiento de una estructura latifundaria, la producción del agro disminuyó, en términos per cápita, en cerca del 9% entre 1970 y 1973 y en ese nivel se estancó en 1974, a pesar de que el gobierno había destinado fuertes sumas al fomento agropecuario. Y es que el *boom* petrolero no había hecho más que propiciar el drenaje de capital del sector rural hacia las urbes, donde el desarrollo de actividades como la construcción, con la que se especulaba en gran escala, no dejaba de ser atractivo.

El deterioro de la producción agropecuaria encareció el precio de los víveres, mermando el nivel de vida de las masas; incrementó la desocupación en el campo y aceleró las migraciones a las ciudades, donde los cinturones de miseria crecieron, y obligó al gobierno a echar mano de las divisas pro-

venientes del petróleo para importar alimentos. Por su parte, la oligarquía aprovechó políticamente la situación, acusando al gobierno de ser el culpable de la "incertidumbre" reinante en el agro, por sus promesas de reforma. A mediados de 1974 éstas fueron definitivamente archivadas.

En tercer lugar, el gobierno de Rodríguez Lara tuvo que afrontar la oposición de la propia burguesía industrial, cuyos intereses sin embargo parecía representar de manera más directa. La cuestión quedó en evidencia durante el segundo semestre de 1975, al promulgarse un decreto que gravaba en un 60% las importaciones de bienes no esenciales, medida con la que se esperaba producir un doble efecto: de una parte, equilibrar la balanza comercial que para entonces registraba un déficit de 160 millones de dólares, y sanear el presupuesto del Estado que estaba ya desfinanciado en más de 50 millones de dólares; de otra parte, impulsar a la "burguesía nacional" hacia una rápida sustitución de importaciones. Sólo que tal burguesía no apareció por ningún lado, como no fuese confundida con todo el bloque oligárquico, que a estas alturas conspiraba ya abiertamente contra el gobierno.

En efecto, el primero de septiembre de 1975 se había producido un intento de golpe de Estado, que dejó un saldo de cuarenta muertos, cuando un grupo de militares derechistas encabezados por el general Alvear asaltó el palacio de gobierno. Rodríguez Lara logró sofocar la rebelión, pero no contrarrestar el evidente deterioro de su régimen, que no hacía más que reflejar el agotamiento de un proyecto nacional reformista incapaz de llevar a la práctica muchos de sus propios planteamientos.

Acosado desde todos los frentes abiertos por la clase dominante, Rodríguez Lara tampoco supo apoyarse en las masas; lo que es más, desaprovechó la coyuntura creada por la huelga general del 13 de noviembre, en la que participó cerca de medio millón de trabajadores, así como las marchas campesinas de diciembre, en favor de la reforma agraria, a las que fue invitado y declinó asistir. Todo esto, en un momento en que el movimiento de masas había alcanzado un grado significativo de desarrollo, expresado tanto por los avances en la organización campesina como sobre todo por el robustecimiento del movimiento obrero, que había dado pasos fundamentales en el camino de su unidad con la derrota de los dirigentes amarillos de la CEOSL (central creada y hasta entonces manipulada por el imperialismo) y el triunfo de la corriente progresista en la CEDOC (central de origen católico derechista), que, junto al sector más avanzado de la clase obrera ecuatoriana, agrupado en la CTE (de orientación marxista), conformaron un vigoroso frente de lucha.

Víctima de sus propias vacilaciones y concesiones al ene-migo de derecha, Rodríguez Lara fue depuesto sin pena ni gloria el 11 de enero de 1976, fecha en que asumió el poder el triunvirato encabezado por el almirante Alfredo Poveda Burbano. Ello marcó el eclipse definitivo del nacional reformismo y el inicio de una fase de transición política que podría caracterizarse por tres rasgos esenciales. Primero, el congelamiento del proyecto expresado en la *Filosofía y plan de acción del gobierno revolucionario y nacionalista del Ecuador*, en el nivel de aplicación alcanzado en 1975. Segundo, la preparación zigzagueante del denominado "retorno" al orden constitucional, en medio de soterradas pugnas entre diversas facciones militares, algunas de las cuales se oponían precisamente a dicho "retorno". Tercero, una escalada represiva en contra del movimiento obrero organizado (que tuvo su más bárbara expresión en la masacre cometida en el ingenio AZTRA, en octubre de 1977), igual que contra otros movimientos populares como el de los maestros. Quizá pueda parecer contradictoria esta política, que por un lado parecía abrir el juego democrático y por otro acentuaba considerablemente la represión, pero en realidad no había tal contradicción: se trataba de dejar la casa en orden para ahorrar molestias a los futuros ocupantes.

El "retorno" al régimen constitucional tuvo lugar a través de varias etapas, la primera de las cuales consistió en el nombramiento de dos comisiones de notables encargadas de elaborar sendos proyectos de constitución que luego serían sometidos a consulta popular. Cuando ésta se realizó, en enero de 1978, el pronunciamiento fue claramente en favor del proyecto más progresista, lo que significó un duro revés político para la oligarquía. Pero un sector del populismo también tuvo lo suyo. Al incluir la constitución aprobada una disposición según la cual el presidente debía ser hijo de padre y madre ecuatorianos se dejaba fuera de la contienda al caudillo de la Concentración de Fuerzas Populares (CFP), Asaad Bucaram, en quien los militares habían personificado todos los males de la llamada "politiquería": incapacidad de racionalizar los intereses burgueses con un mínimo de congruencia y proyección.

En el mismo año 1978 se realizó la primera ronda de las elecciones presidenciales, en las que obtuvo mayoría relativa la fórmula que tenía como candidato a la presidencia al abogado Jaime Roldós Aguilera, postulado por CFP, y como candidato a la vicepresidencia a Oswaldo Hurtado, de filiación democristiana. Aparentemente se trataba de un triunfo de Bucaram entre los bastidores, puesto que

Roldós había sido nominado gracias al apoyo de éste, a quien además estaba ligado por cercanos vínculos de parentesco; luego se descubriría que las cosas no eran tan sencillas. La segunda mayoría la obtuvo el candidato de la derecha, Sixto Durán Ballán. La izquierda, agrupada en su Frente Amplio (FADI), reunió alrededor del 5% del total de votos, bastante menos de lo que cabía esperar.

En la segunda vuelta, efectuada en abril de 1979, Roldós obtuvo una mayoría abrumadora frente a Durán Ballán. Se impuso, como decía el lema de la campaña roldosista, la "fuerza del cambio", que en verdad consistía en un sentimiento amalgamado y difuso en favor de transformaciones democráticas. En las elecciones para la Cámara de Representantes que simultáneamente se realizaron, los candidatos de CFP recogieron la más alta votación, encabezados por Asaad Bucaram. Aliado con el grupo conservador, Bucaram no tendría dificultad en acceder después a la presidencia de dicha Cámara.

Roldós asumió la presidencia en agosto de 1979. En el acto de transmisión del mando, el almirante Poveda Burbano hizo un balance bastante optimista de la evolución de la economía ecuatoriana a partir de 1972:

Antes del Gobierno de las Fuerzas Armadas, el país tenía un presupuesto nacional que bordeaba apenas los cinco mil millones de sucres. Actualmente llega a los 27 mil millones. Su reserva monetaria alcanza los 600 millones de sucres. En la actualidad ella sobrepasa los 15 000 millones. El producto nacional bruto era de apenas 47 000 millones. En 1978 superó los 190 000 millones. Las exportaciones eran de 300 millones de dólares. En 1978 llegaron a los 1 500 millones de dólares. El ingreso per cápita oscilaba cerca de los 200 dólares. Actualmente llega a cerca de los 1 000 dólares.

Acto seguido, Roldós expuso su propia visión de las cosas en un registro más bien sombrío:

Frente a nosotros tenemos un compromiso. Echar a andar un parálítico. Así queda el país luego de tres dictaduras. La denuncia no es una excusa. Recibimos un país con una economía desequilibrada, y más allá de la metáfora tecnocrática está una realidad a la que no es fácil escapar. No son exactas las cifras proporcionadas por determinados miembros del gobierno saliente sobre la situación económica, del país, que es extremadamente crítica y va a constituirse en uno de los serios obstáculos que tenemos por delante. Según nuestros técnicos, la deuda pública externa se acerca a los cuatro mil millones de dólares, lo que significa que al pago de amortizaciones e intereses debe destinarse más de un tercio de

nuestras actuales exportaciones. Por otra parte, estimaciones de las mismas fuentes señalan un déficit que corresponde a organismos de desarrollo como FONADE, FONAPRE y otros. Y a todo esto, hay que agregar la tasa de inflación que unos la fijan en el 12 por ciento y otros entre el 14 y 15 por ciento anual.

Tanto Poveda como Roldós llevaban naturalmente el agua a su molino, pero en cierto sentido los dos tenían razón. El Ecuador de 1979 no era exactamente el mismo de siete años atrás aunque sólo fuese por el hecho del *boom* petrolero. En ese lapso el producto nacional se había incrementado a una tasa promedio del 9% anual; el Estado se había robustecido en todos los órdenes; se habían montado industrias; en ciertas esferas de la población urbana imperaba ahora el "consumismo". Pero también se había incrementado la mi-seria, sobre todo en los sectores rural y suburbano, y creado nuevos "desequilibrios" (contradicciones). El mismo Estado, nuevo rico en cierto sentido, no había logrado sanear real-mente la situación financiera del país.

Pese a todos estos problemas, el contexto en que Roldós iniciaba su gestión distaba mucho de ser catastrófico. En cuanto economía capitalista, la del Ecuador no estaba cierta-mente en crisis: la acumulación venía realizándose sin mayo-res tropiezos, reforzada por una participación relativamente ventajosa en la distribución del excedente económico capita-lista mundial, gracias a la condición de exportador de petróleo. Y en el plano político, la aplastante mayoría obtenida en la segunda vuelta podía esgrimirse como el símbolo de un consenso.

Sin embargo, el primer año de ejercicio de la presidencia de Roldós se caracterizó por una especie de parálisis, en que el ejecutivo parecía haber perdido toda iniciativa. En el plano económico prácticamente se limitó a administrar la situación heredada, salvo ciertos intentos redistributivos: elevación del salario mínimo, reajuste de sueldos y salarios, pronto reabsorbidos por la inflación. Y en el terreno político no tardó en saltar la liebre por el lugar más insólito, bajo la forma de un "conflicto de poderes". La Cámara de Representantes, en la que el partido del presidente contaba en principio con la mayoría relativa, pasó a la oposición desde el momento en que Roldós no quiso resignarse a desempeñar el papel de hombre de paja de Bucaram. Fue una larga guerra de desgaste en la cual, por parte del grupo bucaramista al menos, no se ofrecía ninguna alternativa coherente, sino simples cuestiones demagógicas destinadas a entorpecer la labor de Roldós. En el fondo, y más allá del

incidente y la anécdota, dicha pugna ponía desde luego en evidencia la inorganicidad de la clase dominante ecuatoriana, dividida no sólo en función de los fraccionamientos correspondientes a distintos niveles del movimiento del capital, sino también en función del desarrollo extremadamente desigual de éste, con todas las implicaciones incluso regionales y locales que de ahí se pueden derivar. Ni la acelerada acumulación de capital a raíz del *boom* petrolero ni la acción "racionalizante" del Estado en este periodo habían sido capaces de soldar aquellas brechas históricas, entre otras cosas porque esa misma acumulación se fundamentaba en una especie de renta (la proveniente del petróleo precisamente) y no en una extensión relativamente homogénea de las actividades productivas a partir de una maduración de las condiciones internas del país. Por lo demás, y como ya se vio, la base agraria no sufrió ninguna modificación sustancial en este periodo.

Por todo esto, la propia democracia burguesa "retornaba" a la escena política de manera bastarda, engendrada en una matriz populista. Roldós comprendió que mal podía triunfar fuera del regazo del CFP; pero comprendió también, con un claro sentido del poder, que el "cefepismo" convertido en fórmula de gobierno era absolutamente inviable luego de las transformaciones ocurridas en el Estado ecuatoriano. Abandonó pues su lugar de gestación, para tratar de ubicarse en posiciones que, en términos generales, significaban un acercamiento hacia concepciones socialdemócratas. Desplazamiento que des-de luego no era fácil en la medida en que en este terreno carecía de puntos de apoyo consistentes: concretamente, de una organización política que lo respaldara con firmeza.

Todavía en el mes de junio de 1980, una parte de los colaboradores de Roldós se inclinaban por que el "conflicto de poderes" fuera dirimido por la vía del referéndum, lo cual habría permitido una amplia movilización de masas en el país. Pero el presidente descartó tal perspectiva, presionado, al parecer, por sectores oligárquicos y militares. Además, la "fuerza del cambio" empezaba a transformarse en una entelequia al no traducirse en alguna medida sustancial concreta en favor de los sectores populares, y Roldós seguramente temía que las masas movilizadas lo forzasen a una mayor definición. Prefirió pues una solución desde arriba, con hábiles negociaciones que terminaron por concederle una precaria mayoría en el parlamento. Así, Bucaram no pudo reelegirse cómo presidente de la Cámara en el mes de agosto y su lugar fue ocupado por Raúl Baca Carbo, de la Izquierda Democrática, ahora aliada con Roldós (poco después, la IR se incorporaría oficialmente a la Internacional Socialista).

Entre tanto, el "roldosismo" propiamente dicho fue crean-do, a partir del fraccionamiento que se produjo en el CFP, su propio partido, que en las elecciones municipales de diciembre último terció con el nombre de "Pueblo, cambio y democracia", con mediocres resultados. Elecciones en las que el viscoso espectro político ecuatoriano deparó, por lo demás, una nueva sorpresa: el triunfo más o menos holgado de una organización de tendencia liberal, el Frente Radical Alfarista (FRA), que antes que novedades programáticas exhibía la aureola de martirio de su líder, Abdón Calderón, asesinado por la última dictadura militar. Resultado con el cual distó mucho de clarificarse la vida política nacional.

Si la burguesía ecuatoriana tiene dificultad en expresarse de manera coherente y orgánica en la arena política, otro tanto ocurre con las fuerzas populares. Los partidos de izquierda atraviesan por una fase de aguda crisis que se manifiesta en muchos niveles. En las elecciones municipales a que hicimos referencia, la Unión Democrática Popular (nombre electoral del FADI) quedó legalmente eliminada al no alcanzar el mínimo de 5% de la votación que necesitaba para sobrevivir en este plano (obtuvo menos del 4%). De entre los principales partidos que integraron el FADI, el Comunista se encuentra actualmente desgarrado entre una dirección esclerótica y ciertas tendencias renovadoras que no llegan a cristalizar; el Partido Socialista Revolucionario está dividido en por lo menos dos fracciones, tan débil la una como la otra; el movimiento Segunda Independencia ha abandonado de hecho el FADI para aliarse con el FRA. Las demás agrupaciones políticas, como el MRT o el MIR, carecen por el momento de una real gravitación política en la vida nacional. En general, la izquierda no logra levantar una alternativa a la altura de la situación actual del país. Lo que es más, aparece muy por debajo de la efervescencia popular que, en esas condiciones, o bien se expresa a través de movimientos gremiales y similares, sin ir más allá, o bien termina por ser absorbida por los movimientos populistas. Últimamente se observa, por otra parte, un innegable desarrollo a nivel de masas no proletarias del Movimiento Popular Democrático, expresión legalizada del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, cuya trayectoria maoísta, en principio abandonada pero vigente en la práctica, constituye más bien un factor de división de la izquierda y de desorientación ideológica.

Dentro de este panorama general del Ecuador cabe preguntarse qué sentido puede tener un proceso de desestabilización del gobierno de Roldós, como el que parece haberse puesto en marcha a través de hechos como los mencionados a comienzos de este artículo: guerra con el Perú, toma de la embajada

ecuatoriana en La Habana. Con respecto al primer acontecimiento hay desde luego los intereses muy concretos en torno a una franja fronteriza que parece asentarse sobre importantes yacimientos petrolíferos; y está también la severa crisis interna por la que atraviesa el Perú, con un gobierno que por lo demás no cesa de girar hacia la derecha. Pero más allá de esto se encuentra la mano imperialista, empeñada en acabar con la política internacional de Roldós.

En efecto, quizás el mérito mayor del gobierno roldosista consista en haber delineado y aplicado una política externa independiente que se ha manifestado en muchos aspectos: restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, al cabo de dieciocho años; cordiales relaciones con la Nicaragua sandinista; ruptura inmediata con el régimen militar boliviano surgido del golpe de julio de 1980; resistencia a que los países del Pacto Andino puedan ser utilizados como un bloque al servicio del imperialismo; aproximación a México en términos de política internacional: apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo salvadoreño. Puntos, todos éstos, que sin duda chocan con el proyecto político de la actual administración estadounidense. Obsérvese, por lo demás. Que excepción hecha de Cuba. Nicaragua y Granada, los únicos países de América Latina y el Caribe que mantienen posiciones progresistas como las señaladas son en la actualidad Ecuador y México; al imperialismo le conviene, obviamente, iniciar su ofensiva por el flanco más débil.

¿En qué medida este flanco resistirá a tal ofensiva? Es lo que está por verse en los próximos meses, que se anuncian cruciales para el porvenir del Ecuador y de toda Latinoamérica.